



Aldeia Apiwtxa, Terra Indígena Kampa do Rio Amônia, 12 de agosto de 2008

Sr.

Edison Panayfo

Presidente

Unión de Comunidades Indígenas Fronterizas del Perú – UCIFP

Presente

En los últimos 15 años, los Asháninka que vivimos en la Tierra Indígena Kampa del Río Amônia, por medio de la Asociación Ashaninka del Río Amônia (APIWTXA), de la Cooperativa Ayonpare y de nuestra organización comunitaria, tenemos planeado y puesto en práctica un amplio conjunto de acciones encaminadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro territorio y de la mejora de vida de nuestras familias. Con iniciativas propias y movilizándolo órganos del Estado Brasileiro, tenemos como fin vigilar y defender los límites de nuestra tierra indígena y alertar sobre las graves consecuencias sociales y ambientales de la actividad maderera en territorios indígenas y unidades de conservación en ambos lados de la frontera Brasil-Perú, especialmente en los altos de los ríos Yurúa, Amônia y Tamaya. En los últimos cuatro años, hemos promovido encuentros binacionales entre pueblos indígenas y para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad de nuestras florestas.

Teniendo en cuenta la comunicación recibida de la Unión de Comunidades Indígenas Fronterizas del Perú (UCIFP), con fecha 28 de julio, invitando a Apiwtxa a participar del “I Taller de Capacitación y Fortalecimiento en Actividades de Hidrocarburos para Líderes Indígenas”, realizada en la Comunidad Nativa Nueva Shauaya del 13 al 15 de agosto, donde estuvo prevista la presencia de 100 representantes de comunidades y organizaciones indígenas de los ríos Yurúa, Breu, Amônia, Huancapishtea, Piquiyacu y Genepanshea, órganos de gobierno, y la empresa Petrobrás, para discutir temas relacionados a “hidrocarburos”, queremos, por medio de la presente, esclarecer, inicialmente, nuestras posiciones más generales.

En este sentido, firmemente repudiamos:

- 1) Las concesiones realizadas en los últimos años por el Estado Peruano a empresas de varios países a lotes destinados a la búsqueda y exploración de petróleo en el alto Yurúa y el río Tamaya, sin cualquier consulta previa, informada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas sobre cuyos territorios los lotes fueron establecidos de forma unilateral, en una clara violación a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- 2) La concesión de lotes para la prospección y exploración de petróleo y gas en los bosques bañados por cuencas hidrográficas binacionales, en regiones de frontera internacional, como es el caso de los ríos Yurúa y Amonia, lo que podrá también causar graves consecuencias ambientales a las comunidades que viven en tierras indígenas y unidades de conservación del lado brasileiro y comprometer fuentes de agua utilizadas para el consumo humano en sedes municipales y comunidades de la selva;
- 3) Que, en el caso del Alto Yurúa peruano, la concesión de lotes de petróleo y gas de parte del gobierno peruano esté creando la sobreposición en casi la totalidad de la Reserva Territorial Murunahua, área de 481.560 hectáreas, creada en 1997 para la protección de pueblos indígenas aislados (Murunahua, Chitonahua y otros);
- 4) La actuación de la empresa brasileira Petrobras Energia Peru S.A. que, aprovechando las posibilidades abiertas por la legislación peruana, se volvió, en diciembre del 2005, concesionaria del Lote 110, por un período de 40 años. Localizado en el río Alto Yurúa peruano, en aguas binacionales, con una extensión de 1,4 millones de hectáreas, ese

Lote está sobrepuesto a la Reserva Territorial Murunahua y a territorios de comunidades Ashaninka, Jaminawa y Amahuaca, ya titulados o solicitados.

Del este, el lote tiene límites, aún con el Parque Nacional Alto Purús, estando sobrepuesto en el trecho donde está la Reserva Territorial Mashco-Piro, creada en 1997 para proteger grupos aislados Mascho-Piro. A nuestro entender, la intención de Petrobras de iniciar actividades de búsqueda y exploración de petróleo y gas, en el río Yurúa peruano, en el lote sobrepuesto a los territorios de comunidades nativas e inclusive de indígenas aislados, constituye una flagrante y condenable contradicción con el discurso de responsabilidad socio ambiental adoptado por la empresa en Brasil y con la legislación que la empresa está obligada a respetar en nuestro país.

- 5) La pretensión de las empresas canadienses True Energy y North American Vanadium Inc., de dar inicio a La investigación y exploración de petróleo y gas en su concesión en el Lote 126, que tiene extensión de poco más de un millón de hectáreas, está situado en la frontera internacional, coincide con parte del límite oeste de nuestra tierra indígena en el río Amônia y del Parque Nacional da Serra do Divisor, y se encuentra sobrepuesto a los territorios no titulados de las comunidades Asháninka del río alto Tamaya.
- 6) La política de desenvolvimiento del gobierno peruano en el Alto Yurúa, que asociado a empresas transnacionales, opta hoy por promover la exploración y extracción del petróleo y gas en la región fronteriza, donde la actividad maderera continúa causando inmensos prejuicios ambientales (con invasión de reservas territoriales y unidades de conservación, la apertura de una extensa red de caminos, la destrucción de recursos forestales y de fauna, la inutilización de áreas utilizables para la agricultura y la contaminación de fuentes de agua), “correrías”, contactos y migraciones forzadas de los indígenas aislados, violaciones de derechos humanos y laborales y la desestructuración de las formas de organización comunitaria, política y cultural en varias comunidades.

En cuanto al I Taller de Capacitación y Fortalecimiento en actividades de Hidrocarburos para Líderes Indígenas”, realizado los días 13,14 y 15 de agosto en la Comunidad Nativa Nueva Shauaya, tenemos que exponer las siguientes consideraciones:

1) Lejos de representar un evento partido en tres partes, el taller constituye un evento de dos partes, dado que los intereses y las acciones del gobierno peruano y de las empresas concesionarias aparecen de manera articulada: fue el gobierno que por medio de sus políticas, concedió los lotes a las empresas que ahora actúan, bajo la fachada de “capacitación”, como facilitador de procesos de negociación entre empresas y organizaciones de comunidades indígenas, pretendiendo que éstas den su consentimiento al inicio de las actividades de prospección y exploración de petróleo y gas sobre sus territorios.

2) al contrario de lo que procura hacer creer a la convocatoria del “taller”, encaminada por UCIFP, no acreditamos que la actividad de extracción de petróleo y gas abra cualquier alternativa de desenvolvimiento sustancial para las comunidades y territorios indígenas en el Alto Yuruá. Aunque se vayan a ejecutar acciones de prevención, mitigación y compensación de los impactos sociales y ambientales inicialmente previstos, las consecuencias de la búsqueda y exploración de petróleo y gas serán definitivas e irremediables sobre los recursos naturales (agua, florestas, caza y pesca) de las cuales las comunidades dependen para su sobrevivencia inmediata y futura, sobre las condiciones de salud de las comunidades y sobre sus propias formas de organización social, política y cultural.

3) Lamentar que la Unión de Comunidades Indígenas Fronterizas del Peru (UCIFP), organización que en los últimos tiempos viene demostrando clara asociación con los intereses de la empresa maderera Forestal Venao SRL, decida en este nuevo momento discutir la posibilidad de operación de empresas petrolíferas en territorios de las comunidades que representa, e inclusive en reserva territorial destinada a indios aislados, que ninguna posibilidad tienen de ser consultados.

Alineados con lo ya declarado por organizaciones indígenas brasileras y peruanas en el Documento Final del IV Encuentro de los Pueblos Indígenas de la Frontera Acre-Ucayali, reiteramos la urgente necesidad de una auditoría independiente, con la participación de la

Defensoría del Pueblo, de la Organización Internacional de Trabajo, y de la Relatoría Especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, para investigar las violaciones de los derechos humanos y laborales hoy en curso en la actividad maderera en el Alto Yurúa peruano y de forma cautelar, para acompañar los entendimientos que pretenden respaldar el inicio de la extracción de petróleo y gas en esa misma región.

Alineados con lo ya declarado por las organizaciones indígenas brasileñas y peruanas en el documento final del IV Encuentro de Pueblos Indígenas de la Frontera Acre-Ucayali, reiteramos la necesidad urgente de una auditoría independiente, con la participación de la Defensoría del Pueblo, de la Organización Internacional del Trabajo y la Relatoría Especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, para investigar las violaciones de derechos humanos y laborales vigentes en la actividad maderera en el Alto Yurúa peruano y, de forma cautelar, para acompañar a los entendimientos que pretenden respaldar el inicio de la extracción de petróleo y gas en esa misma región.

También, como ya fue destacado en el documento final del IV Encuentro de Pueblos Indígenas de la Frontera Acre-Ucayali, reafirmamos nuestra posición contraria al inicio de las actividades de exploración aérea en el Estado del Acre, sin que cualquier consulta haya sido hecha a las organizaciones y comunidades indígenas y sin que cualquier información sustantiva haya sido hecha a las comunidades que viven en la selva cuando se da el inicio de las actividades. Y repudiamos, desde ya, cualquier cambio en la legislación o articulación política que pretenda posibilitar la exploración de petróleo y gas en tierras indígenas y unidades de conservación, en una obvia violación de la legislación hoy vigente en el país y de las convenciones internacionales de las que Brasil es signataria.

Por último, declaramos nuestro firme propósito de apelar al público, junto al gobierno brasileño y la opinión pública nacional e internacional, los procesos que están en curso en la región de la frontera internacional Brasil-Perú, pretendiendo construir alianzas que fortalezcan a las comunidades y organizaciones comprometidas con el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad en el Alto Yurúa, garantizando los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas que ahí viven, resulten en soluciones definitivas para los graves problemas ambientales y sociales hoy causados por la actividad maderera y se eviten aquellas que ciertamente serán causadas con el inicio de la exploración de petróleo y gas.

Nos despedimos cordialmente, llamando a las comunidades y organizaciones indígenas del Alto Yurúa peruano a hacer prevalecer sus derechos, que se opongan a cualquier negociación o acuerdo que, mediante promesas fáciles de “desenvolvimiento sustentable” o de beneficios económicos y sociales, no implique ningún consentimiento al inicio de la exploración de petróleo y gas en sus comunidades, en las reservas territoriales o en su entorno.

Aunque la prospección y la exploración de petróleo y gas estén previstas en territorio peruano, como fruto de políticas de gobierno de su país, y que las decisiones de las comunidades Asháninka, Jaminawa y Amahuaca sobre el futuro de sus territorios y sus formas de vida tengan que ser respetadas por nosotros, llamamos la atención que esas actividades, próximas a ser promovidas por Petrobras, empresa brasileña, en aguas binacionales, podrá también traer daños irreparables no sólo en Apiwta sino también a otras comunidades indígenas y de agricultores que viven en el lado brasileño de nuestra frontera común.

Atentamente,

Moisés da Silva Piyãko
Presidente de la Asociación Ashaninka del Río Amônia (APIWTXA)
Isaac da Silva Piyãko
Benki da Silva Piyãko
Antônio Piyãko
Pishiro Asheninka
Aricemi Asheninka
Shomötsi Asheninka
Alípio Piyãko
Winko Piyãko



Aldeia Apiwtxa, Terra Indígena Kampa do Rio Amônia, 12 de agosto de 2008

Sr.

Edison Panayfo

Presidente

Unión de Comunidades Indígenas Fronterizas del Peru – UCIFP

Presente

Referencia: Convite a Associação Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA) participar no “I Taller de Capacitación y Fortalecimiento en actividades de Hidrocarburos para Líderes Indígenas”, na Comunidad Nativa Nueva Shauaya, nos dias 13 a 15 de agosto de 2008, para discutir temas relacionados a prospecção e exploração de petróleo e gás, preparar as comunidades indígenas para os “os novos desafios do desenvolvimento sustentável” e “lograr relações harmoniosas entre o Estado, as empresas petrolíferas e as comunidades”.

Nos últimos 15 anos, nós Ashaninka que vivemos na Terra Indígena Kampa do Rio Amonea, por meio da Associação Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA), da Cooperativa Ayonpare e de nossa organização comunitária, temos planejado e posto em prática um amplo conjunto de ações voltado ao aproveitamento sustentado dos recursos naturais de nosso território e a melhoria da vida de nossas famílias. Com iniciativas próprias e mobilizando órgãos do Estado brasileiro, temos procurado vigiar e defender os limites de nossa terra indígena e alertar para as graves conseqüências sociais e ambientais da atividade madeireira em territórios indígenas e unidades de conservação em ambos os lados da fronteira Brasil-Peru, especialmente nos altos rios Juruá, Amônia e Tamaya. Nos últimos quatro anos, temos promovido encontros binacionais entre povos indígenas nesta fronteira, buscando fortalecer processos de diálogo e de intercâmbio de experiências e reforçar estratégias para o reconhecimento e a proteção dos territórios indígenas e para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade de nossas florestas.

Tendo em vista a comunicação recebida da Unión das Comunidades Indígenas Fronterizas del Peru (UCIFP), com data de 28 de julho, convidando a Apiwtxa a participar do “I Taller de Capacitación y Fortalecimiento en actividades de Hidrocarburos para Líderes Indígenas”, a ser realizada na Comunidad Nativa Nueva Shauaya, de 13 a 15 de agosto, onde está prevista a presença de 100 representantes de comunidades e organizações indígenas dos rios Juruá, Breu, Amônia, Huancapishtea, Piquiyacu e Genepanshea, órgãos de governo e da empresa Petrobrás, para discutir temas relacionados a “hidrocarburos”, vimos, por meio da presente, esclarecer, inicialmente, nossas posições mais gerais.

Neste sentido, firmemente repudiamos:

- 1) as concessões feitas nos últimos anos pelo Estado peruano a empresas de vários países de lotes destinados a prospecção e exploração de petróleo e gás no alto rio Juruá e no rio Tamaya, sem qualquer consulta prévia, informada e de boa fé aos povos e comunidades indígenas sobre cujos territórios os lotes foram estabelecidos de forma unilateral, numa clara violação à Convenção 169 da Organização

Internacional do Trabalho (OIT) e à Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

- 2) a concessão de lotes para a prospecção e exploração de petróleo e gás em florestas banhadas por bacias hidrográficas binacionais, em regiões de fronteira internacional, caso dos rios Juruá e Amônia, o que poderá também causar graves conseqüências ambientais às comunidades que vivem em terras indígenas e unidades de conservação do lado brasileiro e comprometer fontes de água utilizadas para consumo humano em sedes municipais e comunidades na floresta;
- 3) que, no caso do Alto Juruá peruano, a concessão de lotes de petróleo e gás pelo governo peruano tenha criando sobreposição com a quase totalidade da Reserva Territorial Murunahua, área de 481.560 hectares, criada em 1997 para a proteção de povos indígenas isolados (Murunahua, Chitonahua e outros);
- 4) a atuação da empresa brasileira Petrobras Energia Peru S.A. que, aproveitando possibilidade aberta pela legislação peruana, tornou-se, em dezembro de 2005, concessionária do Lote 110, por um período de 40 anos. Localizado no alto rio Juruá peruano, em águas binacionais, com extensão de 1,4 milhão de hectares, esse Lote é sobreposto à Reserva Territorial Murunahua e a territórios de comunidades Ashaninka, Jaminawa e Amahuaca, já titulados ou reivindicados. A leste, o Lote tem limites, ainda, com o Parque Nacional Alto Purús, estando sobreposto à sua zona de amortecimento, no trecho onde está a Reserva Territorial Mashco-Piro, criada em 1997 para proteger grupos isolados Mashco-Piro. A nosso ver, a intenção da Petrobras de iniciar atividades de prospecção e exploração de petróleo e gás, no alto rio Juruá peruano, em lote sobreposto a territórios de comunidades nativas e inclusive de índios isolados, constitui uma flagrante e condenável contradição com o discurso de responsabilidade socioambiental adotado pela empresa no Brasil e com a legislação que a empresa é obrigada a respeitar em nosso país.
- 5) a pretensão das empresas canadenses True Energy Trust e North American Vanadium Inc., de dar início à prospecção e exploração de petróleo e gás em sua concessão no Lote 126, que tem extensão de pouco mais de um milhão de hectares, está situado na fronteira internacional, coincide com parte do limite oeste de nossa terra indígena no rio Amônia e do Parque Nacional da Serra do Divisor, e encontra-se sobreposto a territórios não titulados de comunidades Ashaninka no alto rio Tamaya.
- 6) a política de desenvolvimento do governo peruano no Alto Juruá, que, associado a empresas transnacionais, opta hoje por promover a prospecção e a extração de petróleo e gás em região fronteiriça, onde a atividade madeireira continua a causar imensos prejuízos ambientais (com invasão de reservas territoriais e unidades de conservação, a abertura de extensa rede de estradas e caminhos, a destruição de recursos florestais e da fauna, a inutilização de áreas utilizáveis para a agricultura e a contaminação de fontes de água), “correrias”, contatos e migrações forçados de índios isolados, violações dos direitos humanos e trabalhistas e a desestruturação das formas de organização comunitária, política e cultural em várias comunidades.

Quanto ao “I Taller de Capacitación y Fortalecimiento em actividades de Hidrocarburos para Líderes Indígenas”, a ser realizado nos dias 13-15 de agosto, na Comunidad Nativa Nueva Shauaya, temos a expor as seguintes considerações:

- 1) longe de representar um evento triparte, o “taller” constitui evento bipartite, dado que os interesses e as ações de governo peruano e das empresas concessionárias aparecem de maneira articulada e indissociada: foi o governo que, por meio de suas

políticas, concedeu os lotes às empresas e agora atua, sob a fachada da “capacitação”, como facilitador de processos de negociação entre empresas e organizações e comunidades indígenas, visando que estas dêem seu consentimento ao início das atividades de prospecção e exploração de petróleo e gás sobre seus territórios.

- 2) ao contrário do que procura fazer crer a convocatória do “taller”, encaminhada pela UCIFP, não acreditamos que a atividade de extração de petróleo e gás abra qualquer alternativa de desenvolvimento sustentável para as comunidades e territórios indígenas no Alto Juruá. Ainda que venham a ser executadas ações para a prevenção, a mitigação e a compensação dos impactos sociais e ambientais inicialmente previstos, as consequências da prospecção e da exploração de petróleo e gás serão definitivas e irremediáveis sobre os recursos naturais (água, florestas, caça e pesca) das quais as comunidades dependem para sua sobrevivência imediata e futura, sobre as condições de saúde das comunidades e sobre suas formas próprias de organização social, política e cultural.
- 3) lamentar que a Unión das Comunidades Indígenas Fronterizas del Peru (UCIFP), organização que nos últimos tem demonstrado clara associação com os interesses da empresa madeireira Forestal Venao SRL, decida neste novo momento discutir a possibilidade da operação de empresas petrolíferas nos territórios das comunidades que representa, e inclusive em reserva territorial destinada a índios isolados, que nenhuma possibilidade tem de ser consultados.

Alinhados com o já declarado por organizações indígenas brasileiras e peruanas no documento final do IV Encontro dos Povos Indígenas da Fronteira Acre-Ucayali, reiteramos a urgente necessidade de uma auditoria independente, com a participação da Defensoria del Pueblo, da Organização Internacional do Trabalho e da Relatoria Especial dos Povos Indígenas das Nações Unidas, para investigar as violações dos direitos humanos e trabalhistas hoje em curso na atividade madeireira no Alto Juruá peruana e, de forma cautelara, para acompanhar os entendimentos que visam respaldar o início da extração de petróleo e gás nessa mesma região.

Também como já destacado no documento final do IV Encontro dos Povos Indígenas da Fronteira Acre-Ucayali, reafirmamos nossa posição contrária ao início da atividade de prospecção aérea no Estado do Acre, sem que qualquer consulta tenha sido feita às organizações e comunidades indígenas e sem que qualquer informação substantiva tenha sido feita às comunidades que vivem na floresta quando do início da atividade. E repudiamos, desde já, qualquer mudança na legislação ou articulação política que vise possibilitar a prospecção e a exploração de petróleo e gás em terras indígenas e unidades de conservação, numa óbvia violação da legislação hoje vigente no país e das convenções internacionais das quais o Brasil é signatário.

Por fim, declaramos nosso firme propósito de continuar a tornar públicos, junto ao governo brasileiro e à opinião pública nacional e internacional, os processos que estão em curso na região da fronteira internacional Brasil-Peru, visando construir alianças que fortaleçam as comunidades e organizações comprometidas com o uso sustentado e a conservação da biodiversidade no Alto Juruá, garantam os direitos humanos e territoriais dos povos indígenas que aí vivem, resultem em soluções definitivas para os graves problemas ambientais e sociais hoje causados pela atividade madeireira e evitem aqueles que certamente serão causados pelo início da prospecção e da exploração de petróleo e gás.

Despedimo-nos cordialmente, chamando as comunidades e organizações indígenas do Alto Juruá peruano a fazer prevalecer seus direitos, se opondo a qualquer negociação ou acordo que, mediante fáceis promessas de “desenvolvimento sustentável” ou de benefícios econômicos e sociais, implique num consentimento ao início da prospecção e exploração de petróleo e gás em suas comunidades, em reservas territoriais ou no seu entorno.

Ainda que a prospecção e exploração de petróleo e gás estejam previstas em território peruano, como fruto de políticas do governo de vosso país, e que as decisões das comunidades Ashaninka, Jaminawa e Amahuaca sobre o futuro de seus territórios e suas formas de vida tenham que ser por nós respeitadas, chamamos a atenção que essa atividade, a ser promovida pela Petrobras, empresa brasileira, em águas binacionais, poderá também trazer danos irreparáveis não só à Apiwtxa mas também a outras comunidades indígenas e de seringueiros e agricultores que vivem do lado brasileiro de nossa fronteira comum.

Atenciosamente,

Moisés da Silva Piyãko
Presidente da Associação Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA)

Isaac da Silva Piyãko
Benki da Silva Piyãko
Antônio Piyãko
Pishiro Asheninka
Aricemi Asheninka
Shomõtsi Asheninka
Alípio Piyãko
Winko Piyãko